

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 097 - 2016 - GRJ/GRI

Huancayo, 25 ABR 2016

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

VISTOS:

La Resolución Gerencial Regional del Gobierno Regional Junín N° 063-2015-GR-JUNIN/GRI de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Junín, el Informe Legal N° 100-2015-GRJ/ORAJ del Director Regional de Asesoría Jurídica, y el Informe Técnico N°32-2016-GRJ/ORAF/ORH/STPAD, y los datos generales del proceso:

APELLIDOS Y NOMBRE	CARGO	DESDE	HASTA	DIRECCION	RESOLUCION	DNI
Ing. CASTILLO CARDENAS, José Luis	Director Regional de Transportes y Comunicaciones	01/01/2015	CONTINUA	Jr. Libertad N° 1197-El Tambo - Hyo.	RER N° 016-2015-GR-JUNIN/PR	41171629

CONSIDERANDO:

PARTE DESCRIPTIVA:

Que, con Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 063-2015-GR-JUNIN/GRI, de fecha 17 de Febrero del 2015, se remiten los antecedentes a Secretaría Técnica para la implementación de las acciones administrativas conducentes para proceder al inicio del procedimiento administrativo sancionadora;

Que, es materia de análisis las supuestas faltas cometidas por el involucrado **Ing. José Luis Castillo Cárdenas**, en su calidad de Director Regional de Transportes y Comunicaciones; por haber emitido una resolución que ha transgredido el principio de legalidad y debido procedimiento.

DE LOS HECHOS:

Que, según se tiene de la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 063-2015-GR-JUNIN/GRI; los cargos imputados consiste, en que:

"(...) Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 017-2015-GRJ-DRTC/DR, de fecha 14 de enero del 2015, declara improcedente la solicitud de corregir la vigencia de las tarjetas únicas de circulación, solicitado por el impugnante por las consideraciones expuestas en ella.

Que, con fecha 03 de febrero del 2015, el impugnante interpone recurso de Apelación contra Resolución Directoral Regional N° 017-2015-GRJ-DRTC/DR, por grave transgresión a los principios de legalidad y debido procedimiento, debido que en la Resolución Directoral Regional N° 000541, se resuelve en el artículo segundo: Otorgar AUTORIZACION EXTRAORDINARIA, PARA PRESTAR EL SERVICIO DE



TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL DE PERSONAS EN AUTO COLECTIVO EN LA RUTA: LA OROYA – CARHUAMAYO Y VICEVERSA, por el periodo de tres (3) años, no se dice desde que fecha rige la autorización extraordinaria, además para declarar improcedente su petición no cuenta con fundamentación jurídico, basados en fundamentos meramente subjetivos, por lo que el impugnante considera existe abuso de autoridad. Mediante Reporte N° 037-2015-GRJ-SRTC/DR, de fecha de recepción 10 de febrero del 2015, el Director Regional de Transportes y Comunicaciones Junín eleva a esta instancia el recurso planteado a fin que se resuelva conforme a ley (...).

DE LOS ANTECEDENTES:

De los antecedentes y documentos que dieron origen al inicio del proceso:

De la revisión a la documentación remitida por el Gerente Regional de Infraestructura, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 063-2015-GR-JUNIN/GRI, de fecha 17 de Febrero del 2015; el Informe Legal n° 100-2015-GRJ/ORAJ de fecha 12 de Febrero del 2015; el Reporte N° 037-2015-GRJ-DRTC/DR de fecha 06 de Febrero del 2015 y Reporte N° 078-2015-GRJ-DRTC-SDCTAA/ATT de fecha 05 de Febrero del 2015. Y teniéndose en cuenta el informe antes aludido, que en sus conclusiones, recomienda: 1) *Se declare FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Empresa de Transportes CARLESSY 2000 S.R.L. Representado por su Gerente General Willyams Andrés Pujay, contra la Resolución Directoral Regional N° 017-2014-GRJ-DRTC/DR de fecha 14 de enero del 2015;* 2) *Declararse la NULIDAD de la Resolución, Directoral Regional N° 017-2014-GRJ-DRTC/DR de fecha 14 de enero del 2015, por no encontrarse debidamente motivada y por los fundamentos expuestos en el presente informe legal;* 3) *RETROTRAER el procedimiento administrativo hasta el momento de producido el vicio, esto es, hasta el momento que el Director Regional de Transportes y Comunicaciones Junín, emita un nuevo acto administrativo en relación a la petición de corrección de la vigencia de las Tarjetas únicas de Circulación de los vehículos de placa de rodaje Nros: W2G-327, W1V-524, C9M-212, W1U-107, W1R-257, W3X-630, B8G-085, W1X-694, A7C-568, W2N-653, C6Y-556, W2I-243, COM-380, C4Y-269, W3V-692, F4H-126, F3A-104, W2U-070, F9F-120, W1T-239, W3E-966 Y C3N-692, de la Empresa de Transportes CARLESSY 2000 S.R.L. teniendo en cuenta los fundamentos en relación a la motivación del acto administrativo;* y 4) *Remitir copias de los actuados al secretario técnico de Proceso Administrativo Disciplinario, a fin de deslindar responsabilidad de los funcionarios que dictaron dicha Resolución.* El Gerente Regional de Infraestructura del GRJ, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 063-2015-GRJ/GRI, también antes aludida, resuelve dando conformidad a éstas recomendaciones.

Análisis de los documentos y medios probatorios que sirven de sustento para la toma de decisión:

Resolución Directoral Regional N° 1513-2009-GR-JUNIN-DRTC/15.02, de fecha 06 de Julio del 2009, se otorgó permiso excepcional a favor de la Empresa de Transportes CARLESSY 2000, para prestar servicio de transporte interprovincial regular de personas de automóviles colectivos de ámbito regional en la ruta: la Oroya – Carhuamayo y viceversa por el periodo de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de la expedición de dicha resolución.



Resolución Directoral Regional N° 000541-2012-GR-JUNIN-DRTC/15.02, de fecha 19 de marzo del 2012, mediante el cual se declara fundado el recurso de reconsideración interpuesto por Empresa de Transportes CARLESSY 2000 representado por su Gerente General Willyams Andrés Pujay – en adelante el impugnante – y se deja sin efecto la Resolución Directoral Regional N° 000219-2012-GR-JUNIN-DRTC/15.02 de fecha 15 de febrero de 2012, además se declara procedente la solicitud de empadronamiento, otorgándose autorización extraordinaria para prestar servicio de transporte público especial de personas en auto colectivo de ámbito regional en la ruta: la Oroya - Carhuamayo y viceversa por el periodo de tres (3) años;

Resolución Gerencial de Infraestructura N° 362-2014-GRJ/GRI de fecha 03 de noviembre del 2014, el cual declara Fundado el recurso de apelación presentado por el impugnante, ordenando se CORRIJA la vigencia de la Tarjeta única de Circulación N° 000427 del vehículo de placa de rodaje N° 065-501, hasta el 05 de julio del 2016;

Con fecha 02 de diciembre del 2014, solicita corregirse vigencia de las tarjetas únicas de circulación de los vehículos de placa de rodaje Nros: W2G-327, W1V-524, C9M-212, W1U-107, W1R-257, W3X-630, B8G-085, W1X-694, A7C-568, W2N-653, C6Y-556, W2I-243, COM-380, C4Y-269, W3V-692, F4H-126, F3A-104, W2U-070, F9F-120, W1T-239, W3E-966 Y C3N-692. Teniendo en cuenta lo resuelto en la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 362-2014-GRJ/GRI.

TIPIFICACION DE LA FALTA:

Los PAD instaurados desde el 14 de septiembre de 2014, por los hechos cometidos a partir de dicha fecha, se regirán por las normas procedimentales y sustantivas sobre régimen disciplinario previsto en la Ley N° 30057 y su Reglamento.

Que, la conducta del funcionario involucrado al **Ing. José Luís Castillo Cárdenas**, en su calidad de Director Regional de Transportes y Comunicaciones; es haber emitido una resolución transgrediendo el principio de legalidad y debido procedimiento. **Por lo tanto**; estos hechos descritos, constituirían faltas de carácter administrativo; que no es más ***“Toda acción u omisión voluntaria o no que contravengan las obligaciones, prohibiciones y demás normas sobre los deberes de funcionarios y servidores”***; en el presente caso, se ha vulnerado el artículo 85, letra d)-Ley 30057-Ley de Servicio Civil, que prescribe:



Artículo 85.- Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo: a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su Reglamento; y, d) La negligencia en el desempeño de las funciones...”.

Esto al haber transgredido:

El artículo IV numeral 1.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444, *“Principio de Legalidad, las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”*. Es así, que es pertinente tener en consideración que en el Estado Constitucional Democrático, el poder público, está sometido al Derecho, lo que supone, entre otras cosas, que la actuación

de la Administración deberá dar cuenta de esta sujeción a fin de despejar cualquier sospecha de arbitrariedad. Para lograr este objetivo, las decisiones de la Administración deben contener una adecuada motivación, tanto de los hechos, como de la interpretación de las normas o el razonamiento realizado por el funcionario o colegiado, de ser el caso.

El artículo IV numeral 1.2 de la Ley 27444, *“Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho”*. Al respecto, el numeral 4) del artículo 3° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General que la motivación, entre otros, es requisito de validez del acto administrativo, en consecuencia, el acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico, así el numeral 6.3) del artículo 6° de la norma acotada, establece que no son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacíos de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto.

En relación a la motivación en sede administrativa, El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Exp. N° 01412-2007-PA/TC, en los siguientes fundamentos ha expuesto: *“10.- Por su parte, la doctrina considera que la motivación supone la exteriorización obligatoria de las razones que sirven de sustento a una resolución de la administración; en consecuencia debemos afirmar que el derecho a la motivación de las decisiones administrativas si bien no tiene un sustento constitucional directo, no es menos cierto que forma parte de aquella parcela de los derechos fundamentales innominados que integra la construcción constitucional del Estado que permite apartarse de toda aquella visión absoluta o autoritaria.”*⁵ *“12.- Hablar de un Estado Constitucional significa hablar de un modelo estatal en el que sus acciones están regidas por el Derecho, lo que trae como correlativo que la actuación de la administración deberá dar cuenta de esta sujeción para alejar cualquier sospecha de arbitrariedad. Para lograr este objetivo, las decisiones de la administración deberán contener una adecuada motivación, tanto de los hechos como de la interpretación de las normas o el razonamiento realizado por el funcionario o colegiado, de ser el caso”*⁶



Los hechos investigados, se rigen por las reglas procedimentales previstas en la Ley 30057, Ley de Servicio Civil (LSC), por cuanto el Proceso Administrativo Disciplinario (PAD), se ha instaurado después del 14 de setiembre de 2014, fecha en que ha entrado en vigencia ésta ley.

El Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley 30057, permite al Secretario Técnico (ST), investigar de oficio cuando existan indicios razonables sobre la comisión de una falta.

SUBSUNCION DE LOS HECHOS A LA NORMA.-

⁵ Exp. N° 01412-2007-PA/TC, considerando 10.

⁶ Exp. N° 01412-2007-PA/TC, considerando 12.

tampoco existe pronunciamiento en relación al argumento del impugnante en el sentido que al tener la Resolución Directoral Regional N° 1513-2009-GR-JUNIN-DRTC/15.02 de fecha 06 de julio del 2009 de permiso excepcional para prestar servicio de transporte interprovincial regular de personas en automóviles colectivos de ámbito regional en la ruta: La Oroya – Carhuamayo y viceversa hasta el 05 de Julio del 2013, se le debe de otorgar su TUC a partir de esa fecha para adelante, esto es, hasta el 05 de julio del 2016 y no hasta el 18 de marzo del 2015, tal como ha ocurrido con respecto al TUC N° 00427 del vehículo con placa de rodaje N° C6S-501, al cual se le ha corregido la tarjeta debidamente, ante este supuesto debe ocurrir la misma consecuencia; es así que a los demás vehículos señalados en la solicitud de fecha 02 de diciembre del 2014, se le encuentran en la misma condición que éste.

Además en aplicación del Principio de Uniformidad, contemplado en el artículo IV del título preliminar numeral 1.14, de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444, establece que *"La autoridad administrativa deberá establecer requisitos similares para trámites similares, garantizando que las excepciones a los principios generales no serán convertidos en la regla general. Toda diferenciación deberá basarse en criterios objetivos debidamente sustentados"*; lo que significa, que ante trámites similares se deben exigir requisitos similares, en base a criterios objetivos, no hacerlo iría en contra de derecho procesal administrativo; por lo tanto no existe el fundamento jurídico para no amparar la petición realizada por el impugnante, no existe pronunciamiento en relación a los fundamentos y hechos expresados por el impugnante, además de no resultar específicamente esclarecedora para la motivación del acto, *ergo*, el acto contenido en la Resolución impugnada, no está debidamente motivada – requisito de validez del acto administrativo-, tal como lo establece el numeral 4) del artículo 3° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General⁷, vicio que causa su nulidad de pleno derecho conforme al numeral 2) del artículo 10° de la Ley acotada⁸.

Que, estando a lo antes colegido, y teniendo en cuenta la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 063-2015-GRJ/GRI de la Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Junín; la falta disciplinaria que sería imputable al **Ing. José Luís Castillo Cárdenas**, como Director Regional de Transportes y Comunicaciones; tendría sustento a la grave afectación a los intereses jurídicamente protegidos por el Estado; por cuanto, en forma negligente ha emitido una resolución, transgrediendo el principio de legalidad y debido procedimiento, que en suma agravan el interés público (la sociedad). Y advirtiéndolo, de actuados que, no existe la concurrencia de varias faltas, como también existir antecedentes de ser reincidente en la comisión de la falta; la posible sanción puede servir para advertirle sobre las posibles consecuencias que puede acarrearle la persistencia en su conducta infractora; consecuentemente, ésta falta cometida sería **amonestación escrita**, conforme a lo establecido en el inciso a) del artículo 87, e inciso a) del artículo 88°, ambos de la Ley N° 30057-Ley de Servicio

⁷ Motivación: El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

⁸ Causas de nulidad: Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1.- La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias; 2.- El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez salvo que se presenten algunos de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14°; (...).



Que, es pertinente considerar que el funcionario público es el ciudadano elegido o designado por autoridad competente, conforme al ordenamiento legal, para desempeñar cargos de más alto nivel en los poderes públicos y los organismos con autonomía. Ejerce representación de la voluntad del Estado en virtud de una especial delegación, transmitida en principio por Ley, y posteriormente por decisión administrativa contenida en una Resolución. Adopta decisión y puede en ciertos casos, estar facultado para resolver. Proyecta su actividad al exterior del esquema organizacional en virtud de representación.

En la Sentencia N.º 090-2004-AA/TC, el Tribunal ha expresado que: "(...) el deber de motivar las decisiones administrativas alcanza especial relevancia cuando en las mismas se contienen sanciones". En la medida que una sanción administrativa supone la afectación de derechos, su motivación no sólo constituye una obligación legal impuesta a la Administración, sino también un derecho del administrado, a efectos de que éste pueda hacer valer los recursos de impugnación que la legislación prevea, cuestionando o respondiendo las imputaciones que deben aparecer con claridad y precisión en el acto administrativo sancionador. De otro lado, tratándose de un acto de esta naturaleza, la motivación permite a la Administración poner en evidencia que su actuación no es arbitraria sino que está sustentada en la aplicación racional y razonable del derecho y su sistema de fuentes.

Que, analizada el presente caso, el impugnante sostiene que al emitirse la Resolución Directoral Regional N° 017-2015-GRJ-DRTC/DR que ésta cuestionando, existe transgresión a los principios de legalidad y debido procedimiento, porque se ha expedido ésta, declarando improcedente su petición sin contar con asidero legal, basándose en fundamentos de carácter meramente subjetivos, sin existir apoyo jurídico expreso para no amparar su petición remitiéndonos a la petición del impugnante de fecha 02 de diciembre del 2014, éste solicita que se corrija la vigencia de las Tarjetas únicas de Circulación de los vehículos de placa de rodaje Nros. W2G-327, W1V-524, C9M-212, W1U-107, W1R-257, W3X-630, B8G-085, W1X-694, A7C-568, W2N-653, C6Y-556, W2I-243, COM-380, C4Y-269, W3V-692, F4H-126, F3A-104, W2U-070, F9F-120, W1T-239, W3E-966 Y C3N-692. Teniendo en cuenta lo resuelto en la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 362-2014-GRJ/GRI, que señala se corrija la vigencia del TUC N° 000427, perteneciente al vehículo de placa de rodaje N° C6S-501. En ese sentido le correspondería la corrección a sus demás vehículos, puesto se encuentran en el mismo supuesto y condición que el mencionado vehículo. Además que mediante Resolución Directoral Regional N° 1513-2009-GR-JUNIN-DRTC/15.02 de fecha 06 de julio del 2009 se le otorgó permiso excepcional a favor de su Empresa de Transportes para prestar servicio de transporte interprovincial regular de personas en automóviles colectivos de ámbito regional en la ruta: La Oroya – Carhuamayo y viceversa por el periodo de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de la expedición de dicha resolución, y su permiso excepcional es hasta el 05 de julio del 2013, además, que al contar con la Resolución Directoral Regional N° 000543-2013-GRJ-DRTC/DR se debió otorgarle su TUC por tres años pero a partir del 06 de julio del 2013.

Ante esta petición mediante Resolución Directoral Regional N° 017-2015-GRJ-DRTC/DR se declara improcedente la petición del impugnante, empero, se observa que no se menciona norma alguna que ampre la decisión de improcedencia adoptada por el encargado de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín,



Civil; y artículo 92° del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM concordante con el artículo 230° inciso 3 de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Que, el Órgano Instructor Competente para disponer el Inicio del PAD; es el Gerente Regional de Infraestructura del GRJ.

PLAZO DE PRESENTACION DE DESCARGO:

Que, conforme al literal a) del artículo 106° y 111° del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, el plazo para que el procesado presente sus descargos en el proceso se deberá brindarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles, ante el Órgano Instructor. Dicho plazo se computa desde el día siguiente de la comunicación que determina el inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Asimismo, dicho plazo que puede ser prorrogable debiendo ser justificable.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PROCESADO:

Que, conforme al Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, son derechos y obligaciones de los servidores, los siguientes:

“Artículo 96.1. Mientras esté sometido a procedimiento administrativo disciplinario, el servidor civil tiene derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva y al goce de sus compensaciones. El servidor civil puede ser representado por abogado y acceder al expediente administrativo en cualquiera de las etapas del procedimiento administrativo disciplinario.

Artículo 96.2. Mientras dure dicho procedimiento no se concederá licencias por interés del servidor civil, a que se refiere el literal h) del Artículo 153 del Reglamento mayores a cinco (05) días hábiles.

Artículo 96.3. Cuando una entidad no cumpla con emitir el informe al que se refiere el segundo párrafo de la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley del Servicio Civil en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, la autoridad competente formulará denuncia sin contar con dicho informe.

Artículo 96.4. En los casos en que la presunta comisión de una falta se derive de un informe de control, las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario son competentes en tanto la Contraloría General de la República no notifique la Resolución que determina el inicio del procedimiento sancionador por responsabilidad administrativa funcional, con el fin de respetar los principios de competencia y non bis in ídem.”;

Que, teniéndose en cuenta lo recomendado por la Secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional de Junín y estando a lo dispuesto por esta Gerencia Regional de Infraestructura, y;

En uso de las facultades y atribuciones otorgadas por la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria mediante Ley N° 27902, concordante con la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; y demás normas conexas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APERTURAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO contra el siguiente funcionario:

- ✓ **Ing. José Luis Castillo Cárdenas**, como Director Regional de Transportes y Comunicaciones; por haber incurrido en presunta falta administrativa conforme lo establece Artículo 85° de la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil, precisados



en los literales a) *El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su reglamento*; y d) *La negligencia en el desempeño de las funciones*.

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el presente acto administrativo al funcionario comprendido en el procedimiento que se está instaurando, otorgándoles el plazo que señala el artículo 106º y 111º del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM – Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, a fin de que efectúen los descargos que estimen conveniente, garantizando así el derecho de defensa y el debido procedimiento.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR al Área de notificaciones el diligenciamiento de la presente Resolución, conforme a la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General y su modificatoria mediante Decreto Legislativo N° 1029.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



Ing. WILLIAM TEDDY BEJARANO RIVERA
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 26 ABR 2016



Abog. A. Antonieta Vidatón Roolos
SECRETARIA GENERAL